Finalmente, antes de entrar en el bloque dedicado al Derecho Internacional Humanitario, se destacan a continuación algunos de los principales debates surgidos en 2004 en el ámbito de la **responsabilidad de las empresas con relación a los derechos humanos**. Se ha creído oportuno hacer referencia a esta cuestión en este apartado, ya que la responsabilidad de las empresas en determinadas violaciones de los derechos humanos no dirime la responsabilidad de los gobiernos de proteger a sus ciudadanos de dichos abusos¹⁴. En este informe, se entiende que el impacto de las empresas sobre los derechos humanos trasciende los derechos laborales, tomándose en consideración su incidencia tanto sobre los derechos civiles y políticos como sobre los derechos de segunda y tercera generación¹⁵.

En un contexto de creciente interés por esta cuestión tanto a escala nacional como internacional¹⁶, se han desarrollado, a lo largo de 2004 diversas iniciativas de promoción de los derechos humanos en el ámbito empresarial entre las que cabe destacar de manera especial la creciente demanda por parte del tercer sector de una mayor **transparencia en la gestión de los recursos** generados por las industrias extractivas como garante básico del derecho al desarrollo, así como el débil compromiso del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional para incluir criterios de derechos humanos y de responsabilidad social corporativa en su actividad crediticia en el marco del Informe sobre la Revisión de las Industrias Extractivas (RIE).

Cuadro 7.4. Empresa y derechos humanos: el caso español

En el ámbito empresarial español se ha visto en 2004 la adopción de algunas medidas por parte de algunas empresas transnacionales debido principalmente a la exigencia de cumplir con los criterios de derechos humanos de determinados índices de gestión y de *accountability* (*Dow Jones Sustainability*, *FTSE4GOOD*, *Directrices GRI*), a pesar de que, en términos generales, ha prevalecido una percepción reduccionista respecto a cuáles son sus impactos sobre el conjunto de los derechos humanos de sus grupos de interés. Cabe destacar también, por una parte, la creación de una Subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el Congreso de los Diputados, que debatirá a lo largo de 2005 cuál debe ser el modelo de política pública para la promoción de la RSC y de los derechos humanos en el ámbito empresarial español, y por otra parte, la propuesta del Gobierno de debatir esta cuestión en la Mesa de Diálogo Social, compuesta por empresas, sindicatos y administraciones, dejando fuera a las ONG. En este sentido, el debate de fondo está polarizado entre los partidarios de una ley obligatoria para las empresas y aquellos que defienden medidas de responsabilidad social empresarial basadas en la voluntariedad de las mismas.

7.2. Derecho Internacional Humanitario¹⁷ (indicadores nº 20 y 21)

Finalmente, en el presente apartado se han analizado dos indicadores relativos al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se entiende por DIH el conjunto de normas internacionales destinadas a aplicarse en contextos de conflicto armado internacional e intraestatal. Su objetivo consiste en proteger a las personas víctimas de enfrentamientos bélicos (sean esas personas combatientes o no combatientes) y en limitar los medios y métodos de hacer la guerra. Las normas del DIH tienen fuerza moral y política (lo que genera responsabilidad internacional), y su incorporación en el ordenamiento jurídico interno conlleva responsabilidades jurídicas que afectan sobre todo a los gobiernos, en tanto que entes firmantes de los Convenios y Protocolos¹⁸.

14 En este sentido, diversos documentos de trabajo de la Comisión y Subcomisión de derechos humanos de Naciones Unidas, así como resoluciones de su Consejo de Seguridad han establecido una estrecha relación entre abusos a los derechos humanos y la actividad de determinadas empresas.

15 Con relación al papel de las empresas en los conflictos armados, véase *Barómetro* 5.

16 La Secretaria General Adjunta de la ONU, L. Fréchette, insto en octubre al sector privado a implicarse más activamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la reducción del hambre y la pobreza.

17. Para el seguimiento de los Tribunales Penales internacionales véase la publicación trimestral *Barómetro* en <http://www.escolapau.org>

18 El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciones de tensiones y disturbios internos, como son aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes.

El DIH nació en 1864 con el I Convenio de Ginebra. Se trataba entonces de un conjunto de reglas destinadas a regular las hostilidades entre los estados.¹⁹ Este primer documento fue evolucionando hasta que el 12 de agosto de 1949 se concretó en los Cuatro Convenios de Ginebra, y en el Protocolo adicional relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter internacional (Protocolo I), de 1979. Todos estos textos hacen referencia a conflictos en los que se enfrentan dos estados, como mínimo²⁰. De todos los estados miembro de Naciones Unidas, sólo Nauru no es parte de los Cuatro Convenios de Ginebra, mientras que el Protocolo I ha sido ratificado por 162 países. En cualquier caso, el hecho de que cada vez más los conflictos armados sean de orden intraestatal, y no interestatal (véase apartado 1 relativo a los conflictos armados), en los que la población civil es quien más sufre (véase apartado 5 sobre crisis humanitarias), y en los que tienen lugar graves violaciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales²¹, ha obligado a que el DIH tenga que seguir evolucionando para adaptarse a este nuevo contexto. Esta nueva naturaleza de los conflictos armados actuales ha reavivado el debate sobre el papel de las nuevas tipologías de actores armados, así como de sus responsabilidades.

Por este motivo, el primer indicador que se ha tenido en cuenta a la hora de tratar el presente subapartado se ha construido a partir de las ratificaciones del **Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra** de 12 de agosto de 1949, **relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados sin carácter internacional** (Protocolo II)²², de 1979 (indicador nº 20). En 2003, habían ratificado dicho Protocolo un total de 157 estados.

No obstante, aunque el DIH se encuentra esencialmente recogido en los Cuatro Convenios de Ginebra, complementados con los dos Protocolos adicionales I y II, existen otros instrumentos jurídicos cuyo cumplimiento o incumplimiento tiene claras consecuencias sobre la aplicación del mismo DIH. Éste es el caso, por ejemplo, de aquellos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares, como el Tratado de Ottawa sobre las Minas Antipersona, o bien de la Corte Penal Internacional (véase indicador nº 31), e incluso de aquellos que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Estos últimos han sido especialmente considerados a la hora de redactar el presente apartado, en concreto aquellos textos jurídicos referentes a los menores y a su participación en conflictos armados.

De hecho, en el IV Convenio de Ginebra y los dos Protocolos adicionales I y II ya se estipula a favor de una protección especial para menores, que se complementa con la Convención relativa a los Derechos del Niño, de 1989 (véase indicador nº 31), y el Protocolo Facultativo a la Convención relativa a los Derechos del Niño sobre la participación en conflictos armados, de 2000. Dicho Protocolo Facultativo considera niño y niña soldado a aquella «persona menor de 18 años que de manera voluntaria o forzosa forma parte de las FFAA o de los grupos armados de oposición, y participa de forma directa en combate».²³ Los estados parte se comprometen a sancionar penalmente dichas prácticas. El 12 de febrero de 2002, el Protocolo Facultativo entró en vigor y ha sido ratificado por 87 estados.

En el segundo y último indicador considerado en este subapartado se señalan aquellos **países en los que las FFAA y/o los grupos armados reclutan niños y niñas como soldados** (indicador nº 21). La ONG *Coalition to Stop the Use of Child Soldiers* y el secretario general de la ONU presentan anualmente su infor-

19 Desde 1108 se recogen textos que regulan el trato a los prisioneros de guerra y a los enfermos, pero se trataba de propuestas puntuales y generalmente bilaterales que no constituían un marco de aplicación internacional.

20 I Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las FFAA en campaña, II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las FFAA en el mar; III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra y el IV de Ginebra relativo a la protección de los civiles en tiempo de guerra.

21. A diferencia del DIH, muchas de las disposiciones relativas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales pueden ser suspendidas en una situación de conflicto armado interno.

22. Se entiende por 'conflictos armados sin carácter internacional' aquellos en los que se enfrentan las fuerzas armadas regulares y grupos armados de oposición o grupos armados de oposición entre sí, dentro del territorio de un mismo Estado. En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II. En el artículo nº 3 se regulaban los conflictos armados intraestatales hasta la publicación del Protocolo II.

23. Véanse los artículos 2 y 4 del Protocolo Facultativo de 2000. Hasta la adopción de este Protocolo se consideraba menor a aquellos niños y niñas de 15 o menos años (incluida la Corte Penal Internacional).

me sobre esta materia ante el Consejo de Seguridad desde noviembre de 2001, fecha en la que se adoptó la primera resolución sobre menores y conflictos armados

En 2004 había constancia de que en al menos diez países los gobiernos continuaban reclutando y utilizando a menores en primera línea de combate, mayoritariamente en el continente africano (Burundi, RD Congo, Côte d'Ivoire, Guinea, Liberia, Rwanda, Uganda y Sudán), en Myanmar, y entre los soldados de EEUU presentes en Iraq. En otros casos, son los grupos armados paramilitares o las milicias vinculadas a los gobiernos los que reclutan a estos menores, como en el caso de Colombia o Zimbabwe. Algunos gobiernos, como los de Israel, Indonesia y Nepal utilizan a menores como informantes, espías o colaboradores en los conflictos. Los grupos armados de oposición en Afganistán, Chechenia (Rusia), India, Lao y Yemen utilizan a estos menores para luchar contra las FFAA, para defender un territorio o los recursos naturales de la zona²⁴.

En 2004 había constancia de que en al menos diez países los gobiernos continuaban reclutando y utilizando a menores en primera línea de combate, mayoritariamente en el continente africano

Cuadro 7.5. La problemática de los menores-soldado

Más de medio millón de menores de 18 años están siendo reclutados en una veintena de países de todo el mundo, ya sea por las FFAA o por grupos armados no gubernamentales. Unos 300.000 de esos menores participan en los enfrentamientos armados o realizan tareas logísticas (como espías, mensajeros, portadores, esclavos, etc.) en los diversos conflictos armados actuales, especialmente en el continente africano, donde se estima que hay más de 100.000 menores-soldado. Estos niños y niñas, además, sufren graves violaciones de los derechos humanos, tales como abusos sexuales, maltrato y secuestro.

Entre 2001 y 2004, menores de 18 años participaron de forma directa en las hostilidades en Afganistán, Angola, Burundi, Colombia, RD Congo, Côte d'Ivoire, Filipinas, Guinea, India, Iraq, Israel/Palestina, Indonesia, Liberia, Myanmar, Nepal, Rusia, Rwanda, Sri Lanka, Somalia, Sudán y Uganda.

A modo de **conclusión**, y teniendo en cuenta todos los indicadores anteriores, cabe señalar que la protección y la promoción de los derechos humanos ha continuado siendo una ardua tarea en el año 2004 tanto para los organismos internacionales como para las ONG de todo el mundo, debido a la violación sistemática de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Darfur (Sudán), la escalada de la violencia y los graves abusos en Iraq y la atmósfera de confrontación entre bloques regionales que imperó en el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. No obstante, el hecho de que por primera vez haya aumentado el número de países abolicionistas para la pena de muerte en relación con los países retencionistas y el nombramiento de un Experto independiente sobre terrorismo y derechos humanos son elementos claves para que en los próximos años pueda avanzarse en una aplicación más efectiva de los derechos humanos

24. Para más información, vease <<http://www.child-soldiers.org/resources/global-reports>>